



Asamblea General

Distr. general
20 de septiembre de 2004
Español
Original: inglés

Quincuagésimo noveno período de sesiones

Tema 104 del programa

Derecho de los pueblos a la libre determinación

Derecho de los pueblos a la libre determinación

Informe del Secretario General*

Resumen

En su resolución 58/161, de 22 de diciembre de 2003, la Asamblea General, entre otras cosas, pidió a la Comisión de Derechos Humanos que siguiese prestando especial atención a la vulneración de los derechos humanos, especialmente el derecho a la libre determinación, resultante de la intervención militar, la agresión o la ocupación extranjeras y al Secretario General que le presentase un informe sobre esta cuestión en su quincuagésimo noveno período de sesiones, en relación con el tema titulado “Derecho de los pueblos a la libre determinación”.

* El presente informe se presentó con retraso a fin de finalizar consultas internas sobre el material que debía incluirse en él.

I. Introducción

1. El principio de la libre determinación está consagrado en el párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas.
2. De conformidad con la resolución 2625 (XXV), “Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la realización del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio ...”.
3. En el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reafirma el derecho de todos los pueblos a la libre determinación y se establece la obligación de los Estados de promover el ejercicio de ese derecho y de respetarlo, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
4. La Corte Internacional de Justicia consideró que “el derecho de los pueblos a la libre determinación, tal como había surgido de la Carta y de la práctica de las Naciones Unidas, tenía un carácter *erga omnes*”¹.
5. El presente informe contiene una relación de la cuestión titulada “El derecho de los pueblos a la libre determinación y su aplicación a los pueblos sometidos a dominación colonial o extranjera o a ocupación extranjera” en el 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado (véase A/ES-10/273).

II. Sexagésimo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos

6. En su 60º período de sesiones, en relación con el tema 5 del programa, la Comisión de Derechos Humanos examinó la cuestión titulada “El derecho de los pueblos a la libre determinación y su aplicación a los pueblos sometidos a dominación colonial o extranjera o a ocupación extranjera”. La Comisión aprobó tres resoluciones en relación con ese tema a saber: la resolución 2004/3, sobre la “Situación en la Palestina ocupada”, la resolución 2004/4 sobre la “Cuestión del Sáhara Occidental” y la resolución 2004/5, sobre la “Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”.
7. En el párrafo 1 de su resolución 2004/3, la Comisión de Derechos Humanos reafirmó el derecho inalienable, permanente e irrestricto de los palestinos a la libre determinación, incluido el derecho a establecer su Estado palestino independiente y soberano, señalando que esperaba que el ejercicio de ese derecho se materializase lo antes posible. En el párrafo 2 pidió al Secretario General que transmitiese la resolución al Gobierno de Israel y a todos los demás gobiernos, que le diese la más amplia difusión posible y que facilitase a la Comisión, antes de que ésta iniciase su 61º período de sesiones, toda la información disponible acerca de su aplicación por el Gobierno de Israel. En el párrafo 3, la Comisión decidió incluir en el programa de su 61º período de sesiones el tema titulado “El derecho de los pueblos a la libre

determinación y su aplicación a los pueblos sometidos a dominación colonial o extranjera o a ocupación extranjera” y examinar la situación de la Palestina ocupada en relación con ese tema como cuestión de alta prioridad.

8. En su resolución 2004/4, la Comisión de Derechos Humanos recordó las resoluciones del Consejo de Seguridad 1359 (2001) y 1429 (2002), así como la resolución 1495 (2003), en la que el Consejo apoyó firmemente el plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental como solución política óptima basada en el acuerdo entre las dos partes. La Comisión señaló con satisfacción la entrada en vigor de la cesación del fuego de conformidad con la propuesta del Secretario General, y destacó la importancia que asignaba al mantenimiento de la cesación del fuego como parte integrante del plan de arreglo. La Comisión recordó que la Asamblea General había examinado el informe del Secretario General (A/58/171) y, en el párrafo 3, apoyó firmemente las gestiones del Secretario General y de su Enviado Personal para encontrar una solución política mutuamente aceptable para la controversia sobre el Sáhara Occidental. En el párrafo 5, la Comisión pidió a todas las partes y a los Estados de la región que cooperasen plenamente con el Secretario General y su Enviado Personal, en el párrafo 7, invitó a todas las partes a que cooperasen con el Comité Internacional de la Cruz Roja en sus gestiones para resolver el problema de las personas cuyo paradero aún se desconocía y les pidió que cumplieren la obligación que les incumbía, en virtud del derecho internacional humanitario, de poner en libertad sin más demora a todas las personas que hubiesen retenido desde el comienzo del conflicto. En el párrafo 8, la Comisión observó que la Asamblea había pedido al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que siguiera examinando la situación en el Sáhara Occidental y que le informara al respecto en su quincuagésimo noveno período de sesiones.

9. En el párrafo 3 de su resolución 2004/5, la Comisión de Derechos Humanos reafirmó que la utilización, el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios eran motivo de profunda preocupación para todos los Estados y violaban los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En el párrafo 4, reconoció que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras Potencias fomentaban la demanda de mercenarios en el mercado mundial. En el párrafo 5, la Comisión instó a todos los Estados a que adoptasen las medidas necesarias y ejerciesen el máximo de vigilancia contra la amenaza que entrañaban las actividades de mercenarios y a que adoptasen las medidas legislativas necesarias para impedir que su territorio y los otros territorios bajo su control, así como sus nacionales, fuesen utilizados en el reclutamiento, la concentración, la financiación, el entrenamiento y el tránsito de mercenarios con el fin de planificar actividades encaminadas a obstaculizar el derecho a la libre determinación, derrocar el Gobierno de un Estado o desmembrar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que actuasen en consonancia con el derecho a la libre determinación de los pueblos. En el párrafo 12, la Comisión condenó las recientes actividades de mercenarios en África y la amenaza que entrañaban para la integridad y el respeto del orden constitucional de esos países y para el ejercicio del derecho a la libre determinación de sus pueblos. En el párrafo 14, pidió a la comunidad internacional que, de conformidad con sus obligaciones dimanantes del derecho internacional, cooperase y facilitase ayuda para el enjuiciamiento de los acusados

de realizar actividades mercenarias, en procesos transparentes, francos e imparciales. En el párrafo 15, la Comisión solicitó al nuevo Relator Especial sobre los mercenarios que distribuyese a los Estados la nueva propuesta de definición jurídica del mercenario y los consultase al respecto, y que informase a la Comisión de sus conclusiones. En los párrafos 16 y 17, solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que convocase a una tercera reunión de expertos en las formas tradicionales y modernas de las actividades de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, que diese a conocer los efectos negativos de las actividades de mercenarios en el derecho de los pueblos a la libre determinación y que, cuando se le solicitase y fuese necesario, prestase servicios de asesoramiento a los Estados en que se realizasen. En el párrafo 21 la Comisión solicitó al nuevo Relator Especial sobre los mercenarios que celebrase consultas con los Estados y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para dar cumplimiento a la resolución y que en su 61º período de sesiones le presentase sus conclusiones, con recomendaciones concretas, sobre la utilización de mercenarios para menoscabar el derecho de los pueblos a la libre determinación.

III. Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado

10. El 8 de diciembre de 2003, en su resolución ES-10/14, la Asamblea General decidió pedir a la Corte Internacional de Justicia que emitiese con urgencia una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. El 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia emitió su opinión consultiva. El 13 de julio de 2004, el Secretario General recibió la opinión consultiva de la Corte y la transmitió a la Asamblea General, así como las opiniones separadas y la declaración adjuntas a ella (véase A/ES-10/273).

11. La Corte Internacional de Justicia declaró que la construcción del muro que estaba elevando Israel “en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, y su régimen conexo,” eran “contrarios al derecho internacional” (ibíd., párr. 163, 3, A). La Corte consideró que la construcción del muro y su régimen conexo creaban “un ‘hecho consumado’ en razón de que podrían muy bien llegar a ser permanentes”, en cuyo caso, ello “equivaldría a una anexión de facto” (ibíd.). También señaló que “el trazado elegido para el muro” daba expresión in loco a las medidas ilegales adoptadas por Israel con respecto a Jerusalén y los asentamientos” (ibíd., párr. 122), deploradas por el Consejo de Seguridad², y que entrañaba “el riesgo de nuevas alteraciones de la composición demográfica del territorio palestino ocupado” (A/ES-10/273, párr. 127). La Corte Internacional de Justicia declaró que la construcción del muro, “junto con las medidas tomadas anteriormente,” menoscababa “así gravemente el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación” y constituía “en consecuencia una violación de la obligación de Israel de respetar ese derecho” (ibíd.).

Notas

¹ Timor Oriental, *I.C.J. Reports 1995*, pág. 102, párr. 29.

² Véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad 298 (1971), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980) y 478 (1980).
